

Presentación

La Revista Kabái, después de un periodo de ausencia, presenta su nueva edición **Movimientos Sociales y Procesos de Paz en Colombia**. Esta edición es la obra de un nuevo grupo de trabajo que en el 2016 asumió la responsabilidad de sacar adelante una de las pocas revistas del país de carácter temático y en formato impreso gestionada por estudiantes; una revista que durante toda su historia se ha posicionado como un espacio crítico y de rebeldía en contra de la lógica pauperizadora de la sociedad, y dentro de esta, específicamente, en contra del carácter ideologizante de la educación superior que, proyectada a un adoctrinamiento mercantil, aparece como investigativa, innovadora y emprendedora, cuando en realidad no es más que un momento dispuesto al llano consumo de ideas, necesarias y transversales a la reproducción del capital.

Según las extendidas lecturas corrientes, la privatización se presenta como un efecto inevitable de la desfinanciación pública de la Universidad, dando a entender el hecho como un asunto estrictamente económico. Una lectura crítica plantea más bien que la desfinanciación pública existe para que haya privatización, desmitificando el proyecto económico-político que se viene gestando desde el Estado colombiano, en consonancia con las exigencias de entidades supranacionales como la OCDE, el FMI, el BM y el BID.

Estos agentes de la privatización, lejos de ser los titiriteros que gobiernan el mundo desde un rascacielos en Wall Street o desde el Salón Azul del Palacio de Nariño, son “máscaras de carácter” que realizan la función de la clase dominante de permear todos los espacios sociales con la impo-

sición de la forma mercancía, la cual requiere, en el campo educativo, una mayor cualificación técnica en áreas del conocimiento cada vez más fragmentadas. Ante este escenario, la Universidad se afianza como un momento indispensable para la intensificación de la reproducción social capitalista: producción de valor, producción de profesionales como obreros intelectuales y una naturalización incesante de la desigualdad social que se verifica en la introyección de la competencia en el actuar y el pensar de los estudiantes.

A su vez, el sometimiento de las políticas educativas a las dinámicas globales de homogeneización tecnócrata del pensamiento, que se manifiestan en los proyectos nacionales, encuentran en el aparato burocrático universitario el vehículo ideal para la intrusión de los rancios dictámenes neoliberales. La burocracia administrativa, elegida en línea directa por el Gobierno Nacional, se toma la atribución exclusiva de decidir sobre el ejercicio político que supone el manejo de la Universidad, entendiéndolo como una actividad meramente administrativa, sobre la cual los demás estamentos no tienen ninguna potestad para interferir, limitando sus roles al estricto cumplimiento de sus funciones específicas: estudiantes a estudiar, trabajadores a trabajar, maestros a amaestrar, que las decisiones son cosa de burócratas.

Bajo esta lógica el carácter autónomo de la Universidad Pública ha sido fagocitado, y la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín es viva imagen de este fenómeno. Principio de Sostenibilidad Fiscal en Colombia, inversión a la demanda con el programa Ser Pilo Paga y el endeudamiento a través del Icetex, alza del precio de las

matrículas, recortes al Bienestar Universitario, exámenes de admisión clasistas, espacios de la universidad puestos en alquiler, tercerización de la mano de obra, flexibilización del profesorado, externalización de la investigación, programas de extensión y convenios ofrecidos a empresas nacionales (Argos, Federación Nacional de Cafeteros, Colanta, entre otros) y multinacionales (Anglo Gold Ashanti, Starbucks, Korea Electric Power Corporation), copamiento de plazas profesoriales y cargos directivos por parte de los cuadros de ultraderecha, mientras se minimiza el asesinato de defensores del Proceso de Paz como el profesor Luis Fernando Wolf.

La financiación a la demanda que se da través del Icetex y los programas como Ser Pilo Paga, en un primer lugar, desvían los fondos del Estado que deberían llegar a las arcas de la institución, y, en segundo lugar, profundizan la exclusión de los estudiantes que no tienen la capacidad económica de costear su estancia en la Universidad. Mientras el Bienestar Universitario es amenazado con desaparecer, como se evidencia en el intento de reforma al Acuerdo 044 del 2009 (hundido y arruinado por la lucha estudiantil), los sectores más pudientes encuentran mayor facilidad de acceso, debido también a la racionalidad del examen de admisión que evalúa los conocimientos adquiridos principalmente en los colegios privados. Así las cosas, los programas que garantizan el ingreso y la continuidad de quienes provienen de las clases más bajas son desechados paulatinamente y la prueba de admisión es apenas el abrebocas de un profundo desconocimiento de las diferencias sociales, pues todos y cada uno de los estudiantes deben enfrentarse a las mismas doctrinas y exigencias, haciendo de la educación una tabula rasa para nivelarlos como sujetos "equitativamente" preparados para el mercado laboral.

Asimismo, la reducción de la subvención estatal contenida en el costo de la matrícula y el consiguiente aumento de la misma para los estudiantes, promueve la priorización de las necesidades individuales expresada en raciocinios del tipo "yo no pagué tanto para perder mi tiempo en asambleas y protestas" o "con este paro se está violando mi derecho a la educación". Esta asimilación de la Universidad como mera plataforma hacia la "vida real" del mundo laboral, estimula la creación de científicos suprasociales que actuando aparentemente como entes imparciales y objetivos, en realidad sirven como sujetos productivos en la acumulación de riqueza/miseria, disminuyendo la percepción de la Institución educativa como formadora de agentes de la transformación social, y en el mejor de los casos, mercenarizando dicha función pues se les inculca la intervención sobre la realidad solo allí donde lo exija un contrato. El pensamiento modelado para la perpetuación de la ciencia positivista es el lazarillo del manejo racional de la irracionalidad.

En cuanto a los efectos políticos de la privatización sobre profesores y trabajadores, también asistimos a una relación cada vez más distante entre estos y la Universidad, su realidad contractual sigue horadando en las posibilidades de apersonarse, organizarse, defender sus derechos y solidarizarse con los demás sectores que conforman las fuerzas vivas de la institución. Sin embargo, la tercerización, eficaz herramienta para imposibilitar la actuación organizada de trabajadores y profesores, todavía se ve maniatada ante el movimiento organizado que persiste, encontrando en este la más incómoda piedra en el zapato.

A su vez, a pesar de recientes casos de abuso sexual, así como de espionaje y persecución (ocultados a la opinión pública), no cesa de crecer un "nuevo estamento": la vigilancia privada, que lejos de limitarse a cumplir su función, es obligada a actuar co-

mo agencia del miedo, policiva y represora, subordinada a las órdenes de la administración. Desde allí, se dispone el campus universitario como una propiedad cuyas funciones específicas y predeterminadas requieren ser controladas y garantizadas para evitar el ingreso indebido de terceros no bienvenidos a utilizar sus bienes (como se evidenció en el desalojo de las familias de La Iguaá, a las cuales se les quiso negar la urgencia de protección dentro del Coliseo, para evitar copiar las “malas prácticas” de auxilio a campesinos en la UdeA); asimismo, el argumento de la seguridad sirve para justificar la masificación de cámaras de vigilancia (muchas de ellas ocultas), el control y acceso a espacios y recursos mediante restricciones electrónicas y la utilización del personal privado como la primera fuerza de obstaculización en contra del movimiento estudiantil.

Pero no solo desde la excesiva vigilancia o el alquiler de equipamientos (por ejemplo las canchas alquiladas al Atlético Nacional) se enmarca la modificación del espacio universitario en la lógica privada. Zonas verdes convertidas en jardines, remodelaciones de parqueaderos y espacios administrativos, demolición de la vieja cafetería Central para dar lugar al Ágora, principal punto de (des)encuentro en el campus (un adefesio arquitectónico cuyo nombre no corresponde con la imposible concentración masiva de personas inherente a su diseño y la consiguiente oclusión de un espacio adecuado para la prestación del servicio de restaurante), incursión de marcas expendedoras de alimentos y de papelerías procedentes de empresas privadas. Todo esto, lejos de ser un inocente embellecimiento del entorno, no es más que la típica aplicación espacial de las técnicas ergonómicas y del diseño orientado a los gustos y necesidades de los nuevos “usuarios” cada vez más aburguesados, y también como formas de disminuir los usos “no programados” y en su lugar, aumentar la eficiencia, el buen clima,

etc, es decir, saciar las inconformidades de consumo desde la misma disposición espacial. A través de la noción de “autorización”, dan lugar al despliegue de un autoritarismo técnico, propio del profacismo emergente y vigente.

En su dimensión política, el paternalista dictamen “para eso no hay plata” se configura como un mecanismo efectivo para la desincentivación de las iniciativas que al no responder a las metas fiscales, no caben en la visión unilateral de la dirección universitaria. Así, el pensamiento crítico es desarraigado por el estrecho funcionalismo, y las actividades políticas que van en contra vía del mismo, son escollos a dismantelar.

Para nosotros como organización estudiantil gestionar un espacio que vaya en contra del empobrecimiento del mundo humano que se refleja en estas dinámicas de privatización, no es tarea sencilla. Son muchas las dificultades que se presentan al momento de realizar una acción política de este talante, que pasan desde el interior mismo del proceso hasta las relaciones que este establece. No es posible comprender ningún movimiento, organización o colectivo, si no es en relación con la totalidad de su entorno social, que se manifiesta en cada uno de los componentes y órganos con los cuales se está en función, es decir, no nos podemos concebir como organización abstraída y ajena a dinámicas como la privatización. Nuestra mayor dificultad es entonces, que nosotros mismos hacemos parte de ese empobrecimiento del mundo.

Sin embargo, esto no quiere decir que nos debamos entregar a la sin razón y adaptarnos sumisamente a las lógicas educativas que se han acoplado al interior de la universidad; la lectura política no se detiene en comprender los hechos y darlos a conocer mediante la teoría, sino que plantea también la necesidad de superar mediante un actuar radical las formas de relacionamiento que impiden la construcción de sujetos

